

APÉNDICE RELATIVO A MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 1/1995 APROBADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

- § 1. **ACUERDO de 10 de diciembre de 1997**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento número 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.
- § 2. **ACUERDO de 25 de febrero de 1998**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento número 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.
- § 3. **ACUERDO de 14 de Octubre de 1998**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la modificación del Reglamento 1/1995, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, para una nueva reordenación general de las pruebas de especialización como Juez de Menores.
- § 4. **ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO 2/2001, de 7 de marzo**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se derogan los artículos 4 a 30, ambos inclusive, del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.
- § 5. **ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO 4/2001, de 6 de noviembre**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.
- § 6. **ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO 3/2002, de 19 de junio**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias.
- § 7. **CUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO 1/2003, de 12 de febrero**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias.
- § 8. **ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO 4/2003, de 12 de marzo**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.
- § 9. **ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO 7/2003, DE 23 DE SEPTIEMBRE**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a la especialización de los Miembros de la Carrera Judicial en los asuntos propios de los órganos de lo Mercantil.

- § 10. **ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO 1/2004, DE 25 DE FEBRERO**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo al tiempo mínimo de permanencia en los destinos de los Jueces y Magistrados, así como de la provisión de plazas en los Juzgados, en las Audiencias y en los Tribunales Superiores de Justicia.
- § 11. **ACUERDO de 2 de abril de 2008**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.
- § 12. **ACUERDO de 28 de noviembre de 2008**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a efectos del cómputo del permiso de tres días contemplado por el art. 373.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- § 13. **ACUERDO de 23 de diciembre de 2008**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias a los efectos de su equiparación legal con los funcionarios públicos.
- § 14. **ACUERDO de 19 de noviembre de 2009**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo que se refiere a la inclusión de prórroga anual de los nombramientos de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.
- § 15. **ACUERDO de 25 de febrero de 2010**, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el reglamento 1/2010, Que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

§ 1

ACUERDO de 10 de diciembre de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.¹

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Mediante Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1994, dictado en el recurso contencioso-administrativo número 7497/92, se decretó la suspensión del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 12 de febrero de 1992, por el que se aprobó el Reglamento de provisión y distribución de las vacantes de la categoría de Magistrado correspondientes a los turnos de pruebas selectivas de promoción y de concurso entre juristas de reconocida competencia. Por esta razón, el artículo 1.3 y la disposición adicional quinta del posterior Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995, por el que se aprueba el Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, dispusieron asimismo la suspensión de la vigencia del Título VIII de dicho Reglamento, cuyos artículos 170 a 173 reproducían con total exactitud lo que anteriormente establecían los artículos 1 a 4 del precedente Reglamento de 12 de febrero de 1992.

La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1996 anuló finalmente el artículo 3 del Reglamento de 12 de febrero de 1992 (correspondiente al posterior y suspendido artículo 172 del Reglamento de la Carrera Judicial), por vulneración de lo establecido en el artículo 311.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (precepto legal éste actualmente incorporado al apartado 6 del mismo artículo 311 de dicha Ley Orgánica, tras la reforma introducida a través de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre).

De acuerdo con los dictados de la sentencia citada y al objeto de dar cumplida ejecución a esta resolución judicial, procede la reforma del artículo 172 del Reglamento de la Carrera Judicial (equivalente al precedente y anulado artículo 3 del Reglamento de 12 de febrero de 1992) a fin de adaptar su contenido a las prescripciones del artículo 311.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (de idéntico contenido al anterior artículo 311.4 de la misma Ley Orgánica) lo que el Consejo General del Poder Judicial puede llevar a efecto en ejercicio de la potestad que, en materia de forma de distribución entre turnos y de provisión de plazas vacantes y desiertas de Jueces y Magistrados, le reconoce el artículo 110.2 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ahora bien, dado que, con ocasión de la aprobación del Reglamento de la Carrera Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, a resultas de lo que el Tribunal Supremo hubiera de resolver sobre el recurso contencioso-administrativo número 7497/92 que ante el Alto Tribunal se sustanciaba, se limitó a transcribir literalmente en los artículos 170 a 173, que conforman el Título VIII de dicho Reglamento, el texto de los artículos 1 a 4 del Reglamento de 12 de febrero de 1992, resulta asimismo conveniente ahora completar la obligada modificación del artículo 172 del Reglamento de la Carrera Judicial, con una reforma completa del Título VIII de este Reglamento, que no sólo incorpore los criterios sentados por el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de enero de 1996, sino que, además, asegure la plena adecuación de aquella unidad sistemática reglamentaria con la actual redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en especial de su artículo 311, tras la modificación de la misma por Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, e, incluso, con lo dispuesto en otros preceptos concordantes incluidos en el propio Reglamento de la Carrera Judicial.

Por último, resuelta la controversia judicial a que dio lugar el recurso contencioso-administrativo número 7497/92 y consiguientemente efectuadas las reformas normativas a que se ha hecho mención, correspondería entonces levantar la suspensión del Título VIII del Reglamento de la Carrera Judicial que el

¹ Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 311, de 29 de diciembre de 1997.

Véase el texto de los preceptos modificados del Reglamento 1/1995, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, en el § 4 de la presente publicación, donde, mediante notas a pie de página, se recoge también su redacción originaria.

artículo 1.3 y la disposición adicional quinta del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995, por el que fue aprobado este Reglamento, habían decretado, lo que se realiza mediante la simple derogación de tales preceptos.

En consecuencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de la competencia conferida por el artículo 110.2 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo el trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley Orgánica, aprueba, en sesión de 10 de diciembre de 1997, el presente Acuerdo:

Artículo único.

Se modifica el Título VIII, -"De la forma de distribución entre turnos y provisión de vacantes de la categoría de Magistrado correspondientes a los turnos de pruebas selectivas de promoción y de concurso entre juristas de reconocida competencia"-, artículos 170 a 173, ambos inclusive, del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995, por el que se aprueban los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz, de los Órganos de Gobierno de Tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, así como la relación de ficheros de carácter personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial y se ordena su publicación, que queda redactado en los siguientes términos:....

"TÍTULO VIII

De la forma de distribución entre turnos y provisión de vacantes de la categoría de Magistrado correspondientes a los turnos de pruebas selectivas y de especialización y de concurso

El Artículo 170 queda redactado de la siguiente forma.....
El Artículo 171 queda redactado de la siguiente forma.....
El Artículo 172 queda redactado de la siguiente forma.....
El Artículo 173 queda redactado de la siguiente forma....."

Disposición derogatoria única.

1.- Quedan derogados el apartado 3 del artículo 1 y la disposición adicional quinta del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995, por el que se aprueban los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz, de los Órganos de Gobierno de Tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, así como la relación de ficheros de carácter personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial y se ordena su publicación, quedando en consecuencia sin efecto la suspensión del Título VIII del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, dispuesta en tales preceptos.

2.- Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo.

Disposición final única.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

§ 2

ACUERDO de 25 de Febrero de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.²

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El artículo 341.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial obliga a la determinación reglamentaria de los criterios de valoración sobre el conocimiento del idioma y del derecho civil especial o foral de las Comunidades Autónomas, como mérito preferente en los concursos para los órganos jurisdiccionales de su territorio.

La misma Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 110 número 2, apartado h), modificado por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, atribuye al Consejo General del Poder Judicial la potestad reglamentaria para la valoración como mérito preferente del conocimiento de la lengua y del derecho propios de las Comunidades Autónomas en la provisión de plazas judiciales en el territorio de la Comunidad respectiva.

El Consejo General del Poder Judicial aprobó con anterioridad un Reglamento sobre esta materia por Acuerdo del Pleno de 23 de octubre de 1991. Impugnado en vía contencioso-administrativa, fue suspendido por el propio Consejo General del Poder Judicial antes de su entrada en vigor por Acuerdo de 15 de enero de 1992 y finalmente anulado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo mediante sentencia de 29 de abril de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 2525/1991.

Como consecuencia de la publicación de la referida sentencia del Tribunal Supremo, el Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, antes citado, estableció en su disposición adicional tercera que el Título III del Reglamento 1/1995 de la Carrera Judicial quedase sin contenido.

En cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y como consecuencia de los pronunciamientos contenidos en dicha Sentencia, es necesario llevar a cabo, conforme a los criterios que de ella resultan, el desarrollo reglamentario pendiente de la valoración del conocimiento de las lenguas y del derecho civil especial o foral de las Comunidades Autónomas, en los concursos de acceso a los órganos jurisdiccionales en las mismas Comunidades Autónomas.

2. Para el desarrollo reglamentario efectuado se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- a) e suprime la facultad que se atribuía en el Reglamento anulado al Consejo General del Poder Judicial para sustituir el título oficial expedido por la autoridad académica correspondiente, cuando de la acreditación del conocimiento de la lengua o del Derecho civil especial o foral de la Comunidad Autónoma se trata, pues la repetida sentencia del Tribunal Supremo declara, en su fundamento jurídico cuarto, que "el certificado acreditativo del conocimiento de la lengua o del Derecho civil foral es, pues, ajeno al Consejo, a quien sólo corresponde la valoración, a efectos de los concursos de traslado, de dicho mérito, pero no la estimación de los conocimientos o aptitudes que cada Juez o Magistrado tenga en relación con dichas cuestiones".

² Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 56, de 6 de marzo de 1998.

Véase el texto de los preceptos modificados del Reglamento 1/1995, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, en el § 4 de la presente publicación, donde, mediante notas a pie de página, se recoge también su redacción originaria.

- b) Se fija la misma adición de antigüedad para el conocimiento de la lengua propia o del derecho especial, pues la sentencia del Tribunal Supremo citada, en su fundamento jurídico sexto, llama la atención sobre el hecho de que en el texto anulado, tratándose de Jueces y Magistrados a quienes les está encomendada la interpretación de las normas, "se les asigna por un conocimiento extrajurídico -la lengua oficial de la Comunidad Autónoma- doble valoración que por uno estrictamente jurídico -Derecho civil propio de una Comunidad".
- c) La misma sentencia del Tribunal Supremo a la que se viene haciendo referencia considera que el suplemento de antigüedad reconocido en el Reglamento anulado resulta excesivo. Para ello hace distintas observaciones, entre las que se destaca la remisión al último escalafón para poner de manifiesto que no existen Jueces con más de seis años de antigüedad, con lo que el mérito entonces asignado se transformaba en absoluto.

Con el fin de atender adecuadamente a las exigencias de proporcionalidad señaladas por el Tribunal Supremo, de acuerdo con la realidad escalafonal más que otras consideraciones de tipo teórico, diferenciando adecuadamente las distintas categorías y situaciones, se procedió por este Consejo General a la realización de un estudio de los concursos de traslado, correspondientes a las Comunidades Autónomas con lengua propia o Derecho civil especial, que han sido resueltos durante el período inmediatamente anterior. Se han obtenido así las medias temporales de diferencia entre el Juez o Magistrado que ha obtenido plaza en el concurso y el solicitante que inmediatamente le seguía en el escalafón, distinguiendo entre plazas de categoría de Juez, plazas correspondientes a órganos unipersonales servidos por Magistrado y plazas de órganos colegiados, habida cuenta de que el estudio realizado arroja significativas diferencias entre las tres situaciones. Las medias obtenidas, han servido para orientar el lapso temporal que se establece como período suplementario de antigüedad por el reconocimiento del mérito. El mérito se fija, no obstante, no en años, meses y días, como resultaría de la simple transposición de las cifras obtenidas matemáticamente mediante el estudio anteriormente mencionado, sino en unos períodos anuales concretos y determinados, con el fin de asegurar a los destinatarios de la norma la mayor certeza y seguridad jurídica y evitar al propio tiempo, en la medida de lo posible, la existencia de márgenes de incertidumbre en la aplicación de la misma al resolver los concursos de traslado, que pudieran dar lugar a innecesarias controversias e impugnaciones.

Con la misma finalidad de evitar que se produzca una quiebra de la proporcionalidad, se prevé una regla moderadora, distinta de la de la simple adición prevista en el texto anulado, para el caso de que un mismo solicitante reúna ambos méritos.

Asimismo, con el designio de evitar que la evolución futura de la plantilla judicial pueda provocar un desequilibrio o desproporción sobrevenidos, se prevé que transcurridos dos años, previos los estudios oportunos de los concursos de traslado resueltos, se proceda a ajustar el suplemento de antigüedad previsto en el Reglamento.

- d) Por otra parte, se valora como mérito el Derecho civil especial o foral.

La Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, que dio nueva redacción al artículo 110 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, atribuye al Consejo General del Poder Judicial la potestad de dictar reglamentos de desarrollo de esta Ley, en materia de valoración del Derecho propio de las Comunidades Autónomas, precepto que viene así a complementar, como ley posterior, lo dispuesto en el artículo 341 de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refería únicamente al Derecho civil especial o foral. Este último precepto, que tiene carácter imperativo ("... valorará ..., ... se determinarán...") constituye, además, una exigencia de mínimos, que es plenamente compatible con la habilitación reglamentaria más amplia del citado artículo 110. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una regulación que no cuenta con precedentes reglamentarios, este Consejo General ha optado por partir del reconocimiento exclusivo del Derecho civil especial o foral, con independencia de que la creciente complejidad de la producción normativa de Derecho público emanada de las Comunidades Autónomas pueda reclamar en el futuro la adecuada valoración de los conocimientos adquiridos en esta materia por los miembros de la Carrera Judicial que hayan de servir destinos en los órganos jurisdiccionales de estos ámbitos autonómicos, de acuerdo con las consideraciones contenidas en la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia núm. 56/1990, de 29 de marzo, f.j. 45).

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 25 de febrero de 1998, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Artículo Primero:

La redacción del Título III del Reglamento número 1/1995, de la Carrera Judicial, por el que se establecen los criterios de valoración del conocimiento del idioma y del Derecho propios de las Comunidades Autónomas, en desarrollo del artículo 341.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, será la siguiente:

"TITULO III

De la valoración del idioma y del Derecho civil especial o foral como mérito preferente en los concursos para órganos jurisdiccionales en las Comunidades Autónomas.

El Artículo 108 queda redactado de la siguiente forma....

El Artículo 109 queda redactado de la siguiente forma....

El Artículo 110 queda redactado de la siguiente forma....

El Artículo 111 queda redactado de la siguiente forma....

El Artículo 112 queda redactado de la siguiente forma....

El Artículo 113 queda redactado de la siguiente forma....

El Artículo 114 queda redactado de la siguiente forma...."

Artículo Segundo:

La Disposición adicional tercera del Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena la publicación de los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz, de los Órganos de Gobierno de Tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, así como de la relación de ficheros de carácter personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial, quedará redactada como sigue:

"Disposición adicional tercera. Valoración del idioma...."

Disposición final:

El presente Reglamento se aplicará a los concursos que se convoquen transcurridos seis meses desde su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

§ 3

ACUERDO de 14 de octubre de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la modificación del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, para una nueva reordenación general de las pruebas de especialización como Juez de Menores³.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el análisis de la actual situación de los Juzgados de Menores es constatable, como primera apreciación, el bajo número de Magistrados que presta servicios en los mismos con la especialización legalmente prevista para el ejercicio de dichas funciones jurisdiccionales. Ello es debido principalmente al hecho de que la última convocatoria para la realización de estas pruebas de especialización como Juez de Menores entre los miembros de la Carrera Judicial tuvo lugar hace más de diez años, lo que sin duda constituye un larguísimo período de tiempo durante el cual no ha accedido a aquellos Juzgados de Menores ningún Juez o Magistrado oficialmente especializado en la materia.

Por otro lado, de acuerdo con la actual regulación de las pruebas de especialización como Juez de Menores, el curso previsto a tal fin tiene una excesiva duración de seis meses.

La necesidad de que los Juzgados de Menores puedan ser servidos por miembros de la Carrera Judicial con el grado de capacitación profesional que se estima aconsejable para el ejercicio de funciones jurisdiccionales en una materia tan compleja y especial, así como la conveniencia de adaptar la regulación de las pruebas correspondientes al nivel de especialización que se considera necesario a tal fin, hacen aconsejable la reforma del Capítulo IV ("Pruebas de especialización como Juez de Menores") del Título II ("De la promoción y especialización de Jueces y Magistrados"), del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión de 14 de octubre de 1998, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Artículo 1.

Se modifican los artículos 98 a 104 del Capítulo IV ("Pruebas de especialización como Juez de Menores") del Título II ("De la promoción y especialización de Jueces y Magistrados"), del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que quedan redactados en los siguientes términos:

1. Se modifica el artículo 98, que queda redactado en los siguientes términos:

"Los miembros de la Carrera Judicial podrán alcanzar la especialización como Juez de Menores....."

2. Se modifica el artículo 99, que queda redactado en los siguientes términos:

"En la provisión de Juzgados de Menores entre miembros de la Carrera Judicial, la especialización como Juez de Menores....."

³ Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 256, correspondiente al día 26 de Octubre de 1998.

Véase el texto de los preceptos modificados del Reglamento 1/1995, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, en el § 4 de la presente publicación, donde, mediante notas a pie de página, se recoge también su redacción originaria.

3. Se modifica el artículo 100, que queda redactado en los siguientes términos:

"Los miembros de la Carrera Judicial que obtengan la especialización como Juez de Menores....."

4. Se modifica el artículo 101, que queda redactado en los siguientes términos:

"Los cursos de especialización como Juez de Menores se convocarán....."

5. Se modifica el artículo 102, que queda redactado en los siguientes términos:

"Será requisito indispensable para participar en el curso de especialización como Juez de Menores....."

6. Se modifica el artículo 103, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. A los solicitantes seleccionados para participar en el curso de especialización como Juez de Menores....."

7. Se modifica el artículo 104, que queda redactado en los siguientes términos:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los miembros de la Carrera Judicial que no estén en posesión del título acreditativo de la especialización como Juez de Menores....."

Artículo 2.

Se añade una disposición transitoria al Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que quedará redactada en los siguientes términos:

"Excepcionalmente y por una sola vez, el Consejo General del Poder Judicial convocará,....."

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo.

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

§ 4

ACUERDO REGLAMENTARIO número 2/2001, de 7 de marzo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se derogan los artículos 4 a 30, ambos inclusive, del Reglamento 1/1995, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial.⁴

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de Diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, según la nueva redacción otorgada al artículo 301 de esta última, las pruebas selectivas para el ingreso en la Carrera Judicial se realizarán conjuntamente con las de ingreso en la Carrera Fiscal, llevando a cabo la convocatoria una Comisión de Selección integrada por miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Esta modificación, basada en las consideraciones plasmadas en la Exposición de Motivos de la mencionada Ley Orgánica, incide de manera directa y expresa en la regulación contenida en el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, elaborado desde la atribución exclusiva al Consejo General del Poder Judicial de la competencia en materia de la selección de los Jueces y Magistrados. Con el fin de evitar posibles antinomias entre los citados preceptos y las normas aplicadas hasta ahora, y en virtud del propio contenido de la Disposición derogatoria única de la misma Ley Orgánica 9/2000, han de entenderse derogados los artículos 4 a 30 del citado Reglamento, para cuanto se refiera a las convocatorias de oposición, teniendo en cuenta, por otra parte, que diversos preceptos del Reglamento 1/1995, en su redacción vigente, también se remiten a dichos artículos a la hora de regular el concurso-oposición. Del mismo modo, y por análogas razones, ha de adecuarse la regulación de los procesos selectivos ulteriores en aquellos aspectos que correspondan a la competencia del Consejo General del Poder Judicial, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la nueva redacción dada por la citada Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, todo ello en tanto se procede a la adaptación del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, en la forma prevista en la disposición final segunda de la propia Ley Orgánica 9/2000.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 7 de marzo del año 2001, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Artículo único.

Quedan derogados los artículos 4 a 30 del Reglamento 1/1.995, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, suprimiéndose igualmente las remisiones que a los referidos preceptos se efectúan en otros artículos del citado Reglamento.

Disposición transitoria.

Las pruebas selectivas convocadas antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, continuarán rigiéndose por las normas contenidas en el citado Reglamento 1/1995, del Consejo General del Poder Judicial, en su anterior redacción. Las pruebas que se convoquen con posterioridad se regirán por las normas que la Comisión de Selección someta a la aprobación del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto a la oposición y por las normas que apruebe el Consejo General en cuanto al concurso-oposición.

Disposición final primera.

Por la Comisión de Estudios e Informes se procederá a desarrollar la correspondiente propuesta reglamentaria de adaptación del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, sometiendo la misma a la aprobación del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

⁴ Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 62, correspondiente al día 13 de marzo de 2001.
Véase en el § 4 de la presente obra el texto de los artículos derogados.

Disposición final segunda.

El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

§ 5

ACUERDO REGLAMENTARIO número 4/2001, de 6 de noviembre, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.⁵

La reforma del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que pretende recoger las consideraciones expuestas en el Libro Blanco de la Justicia y las experiencias habidas en la aplicación de la normativa precedente por las Salas de Gobierno, se proyecta sobre una triple perspectiva. En relación con la primera de las perspectivas de reforma anunciadas –relativa a la necesaria distinción, a efectos de formular la oportuna propuesta por la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, entre aquellos candidatos que ya fueron nombrados en años judiciales precedentes y han venido desempeñando funciones jurisdiccionales y aquellos candidatos que formulan su petición por primera vez- parece necesario que, respecto de los primeros, la propuesta de nombramiento, elevada por la Sala de Gobierno Tribunales Superiores de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, pueda agilizarse siempre y cuando, la actividad desarrollada y la observancia de los principios procesales, permitan concluir su idoneidad para la renovación en su cargo de Juez sustituto o Magistrado suplente; mientras que respecto de aquellos candidatos que formulen, por primera vez, su petición, el proceso de selección se ajuste a lo que, hasta el momento, venía realizándose con las necesarias modificaciones.

La segunda de las líneas de reforma apuntada se materializa en la constitución, en el ámbito de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, de una comisión evaluadora dirigida a comprobar la aptitud de los candidatos.

La tercera reforma va encaminada a permitir una más eficaz asignación de medios personales, permitiendo su nombramiento y posterior llamamiento para mas de un Juzgado, dentro del ámbito del Tribunal Superior o Audiencia Provincial; evitando que en determinadas circunscripciones se disponga de un número excesivo de jueces sustitutos, y no se disponga de ellos en cambio, para otras circunscripciones donde resulte imprescindible su nombramiento siempre; dicha movilidad se hará en función de los criterios fijados por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el art. 143.3 del Reglamento 1/1999.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, ha adoptado el siguiente acuerdo

Se modifican los siguientes artículos del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, conforme al texto que se indica:

1. El art. 131,2 nº regla 4ª del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, quedará redactado de la forma siguiente:

“4ª.1. Las solicitudes y documentos que las acompañen habrán de contener, inexcusablemente, los datos siguientes:

- a) Nombre, apellidos, edad,
- b) Manifestación formal de que el concursante
- c) Declaración expresa de que el candidato
- d) Indicación, por orden de preferencia, de la plaza
- e) Relación de méritos y, en su caso, grado de especialización
 - 1) Manifestación formal referida a la preparación
 - 2) Declaración formal relativa al desempeño.....
 - 3) Declaración formal relativa al desempeño,

⁵ Publicado en el “Boletín Oficial del Estado” número 279, correspondiente al día 21 de noviembre de 2001.

Véase el texto de los preceptos modificados del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en el § 4 de la presente publicación, donde, mediante notas a pie de página, recoge también su redacción originaria.

4) Mención, en su caso, del desempeño de actividad docente

5) Declaración formal del conocimiento de las lenguas

f) Declaración formal de no haber ejercido

g) Compromiso de darse de baja como ejerciente

h) Compromiso de tomar posesión de la plaza

2. A la solicitud se acompañarán fotocopias

3. Asimismo, los interesados acompañarán”.

2. El art. 132 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio quedará redactado de la forma siguiente:

“Artículo 132.1. Antes del día 1 de mayo de cada año,

2. Se incluirá en la propuesta a los concursantes

En ningún caso, ni aún cuando sea reiterado

3. Junto con la propuesta, que especificará”.

3.- El art. 133.1 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio quedará redactado de la forma siguiente:

“Artículo 133 nº 1. Las propuestas de nombramiento que formulen”.

4.- Se añadirá un nuevo artículo 133 bis del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, que quedará redactado en la forma siguiente:

“Artículo 133 bis. La evaluación de los méritos alegados por los candidatos, a fin de lograr la selección de los más idóneos, se realizará en la forma siguiente:

a) Se constituirá en la Sala de Gobierno

El Consejo General del Poder Judicial concederá.....

b) La Comisión de Evaluación entrevistará

La ausencia injustificada, de los solicitantes,

El Consejo General del Poder Judicial

c) La Comisión Evaluadora, si lo estimara pertinente,

d) La Comisión Evaluadora elevará la oportuna propuesta”.

5.- El art. 143 nº 5 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio quedará redactado de la forma siguiente:

“Artículo 143.5. El nombramiento de Jueces sustitutos”.

6.- Se añade un nuevo número 8 al artículo 143 del Reglamento 1/1995 de 7 de junio, en la forma siguiente:

“8: La incomparecencia injustificada del Magistrado suplente o”.

Disposición Final Unica.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

§ 6

ACUERDO REGLAMENTARIO número 3/2002, de 19 de junio, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias.⁶

El régimen legal de descanso de los miembros de la Carrera Judicial ha sido objeto de desarrollo reglamentario por el Consejo General del Poder Judicial a través de distintas normas, como los Acuerdos del Pleno del Consejo General de 28 de junio de 1989 y 12 de febrero de 1992, por los que se regula el régimen de licencias y permisos, y dentro del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, el Título XII, de las licencias y permisos, que constituye la regulación actualmente en vigor en esta materia.

En particular, el artículo 252 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, dispone, en su número primero, que podrá concederse licencia por asuntos propios sin derecho a retribución alguna, cuya duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de tres meses cada dos años. De acuerdo con el número segundo del mismo precepto, la solicitud de licencia por asuntos propios se elevará al Consejo General del Poder Judicial por conducto y con informe del Presidente de quien gubernativamente dependa el Juez o Magistrado solicitante, informe que deberá valorar la repercusión que el otorgamiento que la licencia suponga en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia.

Este precepto reglamentario fue dictado al amparo de la previsión legislativa contenida en el artículo 377 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, conforme al cual “reglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración, y cuanto no se halle establecido en la presente Ley”. Se trata, por tanto, de una habilitación reglamentaria con sustantividad propia, distinta y más amplia que la genérica contenida en el apartado g) del número 2 del artículo 110 de la propia Ley Orgánica, sin perjuicio de la limitación general aplicable en materia de estatuto judicial, de acuerdo con la doctrina constitucional (SSTC 108/1986 Y 105/2000) y con la cláusula del párrafo primero del citado número y artículo, en cuanto a que ha de tratarse de regulaciones de carácter secundario y auxiliar, que regulen condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto judicial, sin innovar aquellos ni alterar éste en su conjunto.

Las experiencias derivadas de su aplicación hacen necesario modificar dicho precepto para comprender distintas situaciones extraordinarias que pudieran suscitarse. Al propio tiempo, se procede a adaptar distintas normas conexas, así como a regular algunos aspectos relativos a la tramitación de las resoluciones correspondientes, todo ello a la vista de la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en esta materia, singularmente en las Sentencias de 18 de enero de 1996 y 15 de octubre de 1997.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 19 de junio de 2002, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Los preceptos del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que a continuación se indican, quedarán redactados como sigue:

Artículo 249

“1. La competencia para otorgar las licencias por estudios corresponde

⁶ Publicado en el “Boletín Oficial del Estado” número 155, correspondiente al día 29 de junio de 2002.

Véase el texto de los preceptos modificados del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en el § 4 de la presente publicación, donde, mediante notas a pie de página, se recoge también su redacción originaria.

2. La duración de la licencia vendrá determinada por

Artículo 250

- “1. Las licencias para realizar estudios
2. En el caso de las licencias concedidas
3. Cuando se trate de licencia para efectuar estudios

Artículo 252

- “1. Podrá concederse licencia por asuntos propios
2. Cuando la licencia obedezca a las condiciones
3. La solicitud de licencia por asuntos propios

Disposición Final.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

§ 7

ACUERDO REGLAMENTARIO número 1/2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 12 de febrero de 2003, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias.⁷

El régimen legal de descanso de los miembros de la Carrera Judicial ha sido objeto de desarrollo reglamentario por el Consejo General del Poder Judicial a través de distintas normas, como los Acuerdos del Pleno del Consejo General de 28 de junio de 1989 y 12 de febrero de 1992, por los que se regula el régimen de licencias y permisos, y dentro del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, el Título XII, de las licencias y permisos, que constituye la regulación actualmente en vigor en esta materia.

En particular, el artículo 252 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, regula la licencia por asuntos propios sin derecho a retribución alguna o con retribución en los casos especiales que se establecen en el número 2, según redacción dada por el Acuerdo Reglamentario 3/2002, de 19 de junio.

Este precepto reglamentario fue dictado al amparo de la previsión legislativa contenida en el artículo 377 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, conforme al cual “reglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración, y cuanto no se halle establecido en la presente Ley”. Se trata, por tanto, de una habilitación reglamentaria con sustantividad propia, distinta y más amplia que la genérica contenida en el apartado g) del número 2 del artículo 110 de la propia Ley Orgánica, sin perjuicio de la limitación general aplicable en materia de estatuto judicial, de acuerdo con la doctrina constitucional (SSTC 108/1986 Y 105/2000) y con la cláusula del párrafo primero del citado número y artículo, en cuanto a que ha de tratarse de regulaciones de carácter secundario y auxiliar, que regulen condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto judicial, sin innovar aquellos ni alterar éste en su conjunto.

La experiencia de la aplicación de este régimen de permisos y licencias ha puesto de manifiesto que la actual regulación no contempla una serie de circunstancias personales especiales (por ejemplo, enfermedad grave de un familiar muy próximo cuyo tratamiento requiere una atención personal continuada) que hacen incompatible el adecuado desarrollo de la función durante un periodo de tiempo más prolongado que el que actualmente permiten los permisos ordinarios.

Esta reforma reglamentaria se aborda en el contexto de la adecuada conciliación de la vida familiar y laboral, y en este punto se diferencia de la que ya fue objeto el artículo 252 por el Acuerdo Reglamentario 3/2002, de 19 de junio. Por todo ello, se hace necesario proceder a la modificación del mencionado artículo 252, con la finalidad de incluir en el mencionado Reglamento un nuevo tipo de licencia, basada en circunstancias personales o familiares que puedan afectar gravemente a la situación personal del Juez o Magistrado, y cuya especial gravedad habrá de valorar el Consejo General del Poder Judicial. A tal fin, el Consejo General del Poder Judicial podrá recabar los informes que estime oportunos para fundamentar su resolución.

Es necesario limitar temporalmente esta licencia para asegurar la adecuada prestación del servicio, pero flexibilizando su duración en función de las especiales circunstancias que concurran en cada caso. Por ello, se establece esa licencia con una duración máxima quince días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado excepcionalmente si subsiste la situación que inicialmente aconsejó su otorgamiento y la adecuada cobertura del servicio lo permite.

⁷ Publicado en el “Boletín Oficial del Estado número 46, correspondiente al día 22 de febrero de 2003. Véase el texto de la adición incorporada en el § 4 de la presente publicación.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 12 de febrero de 2003, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, previo informe de las asociaciones profesionales y audiencia del Ministerio Fiscal, así como con intervención de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia, aprobar el presente

ACUERDO

Primero.- Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 252 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, con el siguiente texto:

“4. Podrá concederse licencia con derecho a retribución,.....
En situación de excepcional urgencia, esta licencia

Disposición final única. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

§ 8

Acuerdo Reglamentario 4/2003, de 12 de marzo, del Pleno del Consejo general del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.⁸

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores, ha dado nueva redacción al artículo 308 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La modificación operada en dicho precepto tiene por objeto permitir que la Escuela Judicial pueda incluir en la lista de aspirantes que superen el curso selectivo de ingreso en la Carrera Judicial un número de aprobados superior al de vacantes efectivamente existentes en el momento de la formalización de dicha relación cuando, excepcionalmente, el número de éstas resulte finalmente inferior a la previsión efectuada en su día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al fijarse el número de plazas incluidas en la convocatoria de ingreso en la Carrera Judicial. A tal efecto, el artículo 308.2 de la misma Ley Orgánica, en su nueva redacción, establece que, sin perjuicio de lo establecido en el antes citado artículo 301.2 de esta Ley Orgánica, aquellos aspirantes aprobados que, por no existir vacante, no pudieran ser nombrados Jueces titulares de órganos judiciales ingresarán en la Carrera Judicial en expectativa de destino, tomando posesión ante el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que quedarán adscritos a los efectos previstos en los artículos 212.2, 216 y 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, el artículo 308.2 de esta Ley Orgánica dispone que los Jueces en expectativa de destino tendrán preferencia sobre los Jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de las funciones a las que se refieren los artículos recién indicados. Finalmente, se establece en dicho artículo que los Jueces en expectativa de destino cesarán en sus cometidos en el momento en el que sean nombrados Jueces titulares y sean destinados a las vacantes que se vayan produciendo, según el orden numérico que ocupen en la lista de aspirantes aprobados.

II

La indicada modificación legal hace necesaria una reforma del vigente Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial. Por un lado, obliga a modificar algunos preceptos de dicho Reglamento frontalmente afectados por la nueva redacción dada al artículo 308 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Éste es el caso de los artículos 33, 130.4 y 199 del Reglamento de la Carrera Judicial. Por otro lado, resulta necesario incorporar al mismo una regulación específica que desarrolle y precise aquellos aspectos del régimen jurídico de los Jueces en expectativa de destino no abordados en su integridad o no previstos en la Ley Orgánica que modifica el artículo 308 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada la singularidad de la figura del Juez en expectativa de destino, se ha considerado oportuno dedicar a la misma un Título específico en el marco del Reglamento. No obstante, con objeto de limitar, en la medida de lo posible, el alcance formal de la reforma del Reglamento de la Carrera Judicial exigida por la modificación del recién citado precepto legal, se ha optado por concentrar la regulación del régimen jurídico de los Jueces en

⁸ Publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 69, correspondiente al día 21 de marzo de 2003.

Véase el texto de los preceptos modificados en el § 4 de la presente publicación, donde mediante nota a pie de página, se recoge también su redacción originaria.

expectativa de destino en un solo artículo. Asimismo, para evitar reiteraciones innecesarias y habida cuenta de que la expectativa de destino se ha configurado como una mera modalidad de la situación de servicio activo en la Carrera Judicial, se efectúa una remisión residual al régimen de esta última en lo no previsto en dicho artículo, del mismo modo que ocurre en el ámbito de la legislación general sobre la función pública (art. 29.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto). Finalmente, la reforma reglamentaria que tiene por objeto el presente Acuerdo incluye las adaptaciones de orden formal y sistemático necesarias como consecuencia de la introducción de un nuevo Título en el Reglamento de la Carrera Judicial.

III

El desarrollo reglamentario del artículo 308.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se acomete mediante el presente Acuerdo se fundamenta, esencialmente, en los siguientes criterios:

a) La regulación que se aborda parte del carácter excepcional de la figura del Juez en expectativa de destino, así como de su necesaria diferenciación respecto de la figura del Juez sustituto, tal y como se deduce del citado precepto legal.

b) Con objeto de evitar agravios comparativos y de mantener la unidad de las promociones, se ha optado por la oferta indistinta a todos los aspirantes aprobados tanto de las vacantes efectivamente disponibles como de las adscripciones al servicio de Tribunales Superiores de Justicia en régimen de expectativa de destino necesarias para completar la lista de aspirantes aprobados.

c) Tanto en la elección inicial de vacante o adscripción en régimen de expectativa de destino como a la hora de destinar a los Jueces en expectativa de destino a las vacantes existentes tras cada concurso de traslado serán tenidos en cuenta, en los términos previstos en el presente Acuerdo, los méritos relativos al conocimiento de la lengua y Derecho civil especial o foral propios de las Comunidades Autónomas.

d) Dado que el legislador no ha ampliado la relación tasada de situaciones administrativas en las que se pueden hallar los Jueces y Magistrados (art. 348 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) con ocasión de la reforma que introduce la figura del Juez en expectativa de destino, resulta forzoso entender, como ya ha quedado apuntado, que ésta constituye una modalidad más, bien que extraordinaria y excepcional, de la situación de servicio activo, que se viene a unir a las modalidades ya previstas en los artículos 349 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 199 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio.

e) En cuanto al ámbito territorial en el que los Jueces en expectativa de destino ejercerán sus funciones, se establece que lo harán en régimen de adscripción al servicio de un Tribunal Superior de Justicia, si bien, para limitar en términos razonables el alcance territorial de la disponibilidad de los Jueces en expectativa de destino, se precisa que, en todo caso, aun cuando la correspondiente Comunidad Autónoma fuese pluriprovincial, éstos prestarán servicios en el ámbito territorial de una sola provincia.

f) Por lo que se refiere a la clase de órganos jurisdiccionales en los que los Jueces en expectativa de destino podrán ejercer sus funciones, se establece que prestarán servicios en órganos unipersonales de ámbito provincial o inferior de los órdenes jurisdiccionales civil o penal, si bien lo harán preferentemente en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción servidos por Jueces y sólo con carácter subsidiario en órganos unipersonales de los mencionados órdenes jurisdiccionales servidos por Magistrados. Excepcionalmente, cuando no exista la posibilidad de adscribir a los Jueces en expectativa de destino, en el ámbito de la provincia a la que se hallen adscritos, a los órganos anteriormente indicados, podrán prestar servicios asimismo, y por este orden, en órganos colegiados de los órdenes civil o penal o, en su defecto, en órganos unipersonales de otros órdenes jurisdiccionales.

g) En lo relativo a la clase de funciones atribuibles a los Jueces en expectativa de destino, la presente reforma reglamentaria precisa y concreta lo ya establecido en el propio artículo 308.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en coherencia con lo señalado en las reglas quinta y sexta (apartado 2 en ambos casos) de la recientemente aprobada Instrucción 1/2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre régimen de sustituciones, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, con objeto de que los Jueces en expectativa de destino ejerzan preferentemente, y por este orden, funciones de refuerzo o de sustitución de larga duración.

h) No obstante lo anterior, se prevé la posibilidad de adscribir a los Jueces en expectativa de destino a órganos distintos de aquellos a los que hubieren sido adscritos inicialmente cuando cesen sus funciones en éstos y, sin embargo, continúen en expectativa de destino.

i) La reforma reglamentaria que se acomete mediante el presente Acuerdo presta igualmente especial atención al régimen de percepción de indemnizaciones por los gastos en que deban incurrir los Jueces en expectativa de destino en razón del servicio y, en particular, por desplazamiento.

j) Por último, se dispone que a los Jueces en expectativa de destino se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a todos los efectos. En particular, en lo concerniente al tiempo mínimo de permanencia en el primer destino a que se refiere el artículo 175 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, se precisa que el tiempo permanecido en expectativa de destino se considerará prestado en la vacante finalmente asignada.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 12 de marzo de 2003, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 110.2 a), b), f), h), k) y l) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo el trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley Orgánica, ha adoptado, en su reunión del día 12 de marzo de 2003, el siguiente

Acuerdo:

Artículo 1.

Se modifican los artículos 33, 130 y 199 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que quedan redactados de la siguiente forma:

.....

Artículo 2.

Se añade un nuevo Título V al Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, con la siguiente redacción:

"Título V

De los Jueces en expectativa de destino"

Artículo 129 bis.

1. Cuando, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 301.2
2. En tanto no sean nombrados Jueces titulares y destinados
 A los efectos previstos en el párrafo anterior, los Jueces
 Sólo excepcionalmente, cuando no sea posible asignar
3. Los Jueces en expectativa de destino que ejerzan
 En particular, los Jueces en expectativa de destino,
4. Las nuevas adscripciones de los Jueces en expectativa
 Las nuevas adscripciones a que se refiere el párrafo
 Si coincidiese en el tiempo y en el ámbito de una misma
 Las nuevas adscripciones se harán efectivas en el plazo
 Los Jueces en expectativa de destino sólo vendrán
5. Sólo excepcionalmente, si se diese la circunstancia
 En todo caso, para evitar la situación a que se refiere
6. El régimen retributivo de los Jueces en expectativa
7. Los Jueces en expectativa de destino tendrán
 A los solos efectos de la determinación de las
 Transcurrido dicho período, tendrá la
 Lo previsto en el presente apartado se entiende

8. A los Jueces en expectativa de destino se les
9. En lo no previsto en el presente artículo, los
10. Los Jueces en expectativa de destino cesarán
 Cuando sean más de una las vacantes, éstas

Artículo 3..

El actual Título V del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, pasará a ser el V bis, quedando redactado su encabezamiento en los siguientes términos:

"Título V bis

De los Magistrados suplentes y los Jueces sustitutos"

Disposición transitoria

En tanto no se establezca por ley el régimen retributivo de los Jueces en expectativa de destino, las retribuciones complementarias y, en su caso, el componente variable de la retribución de dichos Jueces se corresponderán con los de los Jueces o Magistrados titulares de los órganos judiciales a los que se hallen efectivamente adscritos.

Si excepcionalmente los Jueces en expectativa de destino careciesen transitoriamente de adscripción a un órgano jurisdiccional concreto, percibirán, hasta su adscripción a otro órgano jurisdiccional, que habrá de efectuarse en el plazo más breve posible, las retribuciones complementarias propias de los órganos unipersonales servidos por Jueces de la categoría inferior.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo.

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

En Madrid a doce de marzo de dos mil tres.- El Presidente del Consejo General del Poder Judicial,
FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO.-

§ 9

Acuerdo Reglamentario 7/2003, de 23 de septiembre, del Pleno del Consejo general del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a la especialización de los Miembros de la Carrera Judicial en los asuntos propios de los órganos de lo Mercantil⁹

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los apartados 11 y 12 del artículo segundo de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, han añadido nuevos apartados a los artículos 329 y 330 de esta última Ley Orgánica que defieren a la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial la regulación del proceso selectivo para la obtención de la especialización en los asuntos propios de los nuevos órganos de lo Mercantil, cuya creación prevé la misma Ley Orgánica 8/2003. La regulación de dicho proceso selectivo se aborda mediante el presente Acuerdo con el fin de permitir la selección de un número adecuado de miembros de la Carrera Judicial con carácter previo a la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil, que conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 8/2003 deberá tener lugar a partir del día 1 de septiembre de 2004.

Por razones de elemental coherencia temática y sistemática la regulación del proceso selectivo para la obtención de la especialización en los asuntos propios de los nuevos órganos de lo Mercantil se lleva a cabo añadiendo un nuevo Capítulo, relativo a la especialización en los asuntos propios de dichos órganos, al Título del Reglamento número 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que se refiere precisamente a la promoción y especialización de los Jueces y Magistrados, a saber, el Título II.

En este nuevo Capítulo que se añade al Reglamento de la Carrera Judicial se diseña un proceso selectivo de especialización que, a pesar de su carácter singular y específico, incorpora y combina diversos elementos procedentes de las actuales pruebas selectivas para la promoción a la categoría de Magistrado y para la especialización de Magistrados. Asimismo, no cabe desconocer una cierta inspiración del nuevo modelo en las pruebas de especialización como Juez de Menores, apreciable especialmente en la configuración en el seno del proceso selectivo de una primera fase de valoración de méritos de los aspirantes.

El proceso selectivo consta, además, de dos fases posteriores que persiguen garantizar una sólida formación y base de conocimientos en los miembros de la Carrera Judicial que lo superen, a saber: una prueba cuyo ámbito temático, contenido y demás modalidades serán precisados en la convocatoria, así como un curso teórico-práctico que comprenderá tanto la impartición de determinados módulos teóricos como la realización de prácticas tuteladas en órganos de lo Mercantil.

El nuevo Capítulo que se añade al Reglamento de la Carrera Judicial hace referencia asimismo a las actividades específicas de formación que deberán realizar, antes de tomar posesión en su nuevo destino, los miembros de la Carrera Judicial que, no ostentando la especialización en los asuntos propios de los órganos de lo Mercantil, obtengan plaza en un Juzgado de lo Mercantil, así como, en general, todos aquellos miembros de la Carrera Judicial que obtengan destino en los Juzgados de lo Mercantil que tengan

⁹ Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 237, correspondiente al día 3 de octubre de 2003. Véase el texto de los preceptos modificados en el § 4 de la presente publicación.

atribuida la competencia para conocer de los litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en el Reglamento número 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria.

Finalmente, el presente Acuerdo incluye una disposición adicional y una serie de disposiciones transitorias que atienden al proceso de puesta en funcionamiento de los órganos de lo Mercantil, así como a las particularidades que necesariamente concurrirán en los primeros procesos selectivos que se convoquen para la obtención de la especialización en los asuntos propios de dichos órganos.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 110.2 a) y b), así como los artículos 329.4 y 330.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y previo el trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley, ha adoptado, en su reunión del día de la fecha, el siguiente Acuerdo:

ARTÍCULO ÚNICO.

1. Se añade al Título II, “De la promoción y especialización de los Jueces y Magistrados”, del Reglamento número 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, un nuevo Capítulo V, a continuación del actual Capítulo IV, integrado por los artículos 104 bis 1 a 104 bis 11, en los siguientes términos:

“CAPÍTULO V

PROCESO SELECTIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN LOS ASUNTOS PROPIOS DE LOS ÓRGANOS DE LO MERCANTIL

Artículo 104 bis 1. Los miembros de la Carrera Judicial

Artículo 104 bis 2. En la provisión de destinos en órganos de lo Mercantil

Artículo 104 bis 3. Los miembros de la Carrera Judicial que obtengan

Artículo 104 bis 4. Los procesos selectivos para la obtención

Artículo 104 bis 5. 1 Será requisito indispensable para participar

2. Los interesados en participar acompañarán

3. Concluido el plazo de presentación de solicitudes,

4. Concluido el plazo de formulación de reclamaciones,

Artículo 104 bis 6. 1. El Consejo General del Poder Judicial,

2. El baremo establecerá la valoración de los siguientes méritos:.....

3. Sólo podrán valorarse los méritos que,

4. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocar

5. La valoración de los méritos establecidos en el apartado

6. Una vez valorados los méritos, el Tribunal calificador

Artículo 104 bis 7. 1. Publicada la relación a que se refiere el apartado 6

2 El contenido y los criterios de calificación.....

3 La prueba prevista en el apartado anterior será valorada

3. La puntuación final de los aspirantes que hayan

4. Valorada la prueba prevista en el apartado 1

Artículo 104 bis 8. 1. Los aspirantes aprobados accederán a la fase

2. El primer período del curso teórico-práctico, que se desarrollará

Artículo 104 bis 9. 1. Concluido el curso teórico-práctico

2. La puntuación final ponderada obtenida por los aspirantes

Artículo 104 bis 10. En lo no previsto en el presente capítulo

- Artículo 104 bis 11.** 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
2. Los miembros de la Carrera Judicial que obtengan
3. El actual Capítulo V del Reglamento número 1/1995,

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

Los miembros de la Carrera Judicial con destino en órganos jurisdiccionales que, en aplicación de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sean transformados en órganos de lo Mercantil, deberán realizar las actividades específicas de formación previstas en el artículo 104 bis 11 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en la redacción dada al mismo por el presente Acuerdo, salvo que previamente hayan obtenido la especialización en los asuntos propios de los órganos de lo Mercantil.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

1. En las dos primeras convocatorias de procesos selectivos para la obtención de la especialización en los asuntos propios de los órganos de lo Mercantil la prueba a que se refiere el apartado 1 del artículo 104 bis 7 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera judicial, en la redacción dada al mismo por el presente Acuerdo, consistirá en la realización de dos dictámenes, cuyo objeto se referirá a un conjunto de temas que se anunciarán en la convocatoria del respectivo proceso selectivo.

Cada uno de los dictámenes, para cuya elaboración los aspirantes dispondrán de cinco horas, se realizará en fechas distintas, entre las que habrá de transcurrir un lapso de tiempo que no será inferior a los diez días.

El primero de los dictámenes tendrá carácter eliminatorio respecto del segundo.

El objeto preciso de los mismos, los criterios de calificación y las demás modalidades de realización de esta prueba serán determinadas en las bases de la convocatoria del proceso selectivo.

2. La puntuación final de los aspirantes que hayan superado la prueba a que se refiere el apartado anterior resultará de la ponderación de la puntuación obtenida en ésta y de la previamente otorgada a aquéllos por razón de sus méritos. A tal efecto, en las dos primeras convocatorias de procesos selectivos para la obtención de la especialización en los asuntos propios de los órganos de lo Mercantil, el valor de la puntuación obtenida en la prueba será del 60 por ciento y el de la puntuación otorgada por razón de los méritos del 40 por ciento.

3. La tercera fase del primer proceso selectivo que se convoque para la obtención de la especialización en los asuntos propios de los órganos de lo Mercantil no comprenderá el segundo período a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 104 bis 8 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en la redacción dada al mismo por el presente Acuerdo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

Los dos Magistrados con destino en el orden jurisdiccional civil que integren el Tribunal juzgador del primer proceso selectivo que se convoque para la obtención de la especialización en los asuntos propios de los órganos de lo Mercantil serán designados de entre Magistrados con experiencia acreditada en el conocimiento de dichos asuntos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

En Madrid a veintitrés de septiembre de dos mil tres.- El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO.-

§ 10

Acuerdo Reglamentario 1/2004, de 25 de febrero, del Pleno del Consejo general del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo al tiempo mínimo de permanencia en los destinos de los Jueces y Magistrados, así como a la provisión de plazas en los Juzgados, en las Audiencias y en los Tribunales Superiores de Justicia.¹⁰

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 15 de enero de 2004 entró en vigor la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Entre otros muchos aspectos, la reforma afecta de manera particular a los tiempos mínimos de permanencia de los Jueces y Magistrados en sus destinos y a las reglas por las que se rige la provisión de los mismos. Se trata en ambos casos de modificaciones que exigen, con carácter urgente y previamente a una cabal adaptación del vigente Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a la Ley Orgánica 19/2003, una reforma al menos de aquellos preceptos del citado Reglamento sin la cual los procedimientos de provisión de destinos de inminente convocatoria carecerían de bases normativas claras y sólidas. Asimismo, se introducen en el Reglamento algunas modificaciones no determinadas por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, pero consideradas igualmente necesarias y urgentes a los efectos a los que atiende el presente Acuerdo.

Por lo que se refiere al tiempo mínimo de permanencia en los destinos de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica 19/2003 lo reduce de dos a un año en destino forzoso y de tres a dos en destino voluntario. Si bien esta modificación no exige en principio una modificación del Título IX del vigente Reglamento de la Carrera Judicial, pues la determinación de los tiempos de permanencia en los destinos corresponde, sin perjuicio de la obligada observancia de los plazos mínimos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de su potestad reglamentaria, el órgano de gobierno del Poder Judicial no advierte razón alguna por la que dichos tiempos no deban coincidir con los plazos mínimos establecidos en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. De ahí que por la presente reforma se adapten los tiempos de permanencia fijados en el vigente Reglamento de la Carrera Judicial a los nuevos plazos mínimos previstos en la Ley Orgánica 19/2003.

Por cuanto atañe a la provisión de destinos en los Juzgados, Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia, la citada Ley Orgánica ha introducido dos novedades importantes: de un lado, refuerza notablemente la incidencia de la especialización (en particular, la derivada del ejercicio de funciones jurisdiccionales en un determinado orden) en la provisión de aquéllos, y, de otro, extiende el elenco de plazas o cargos jurisdiccionales de nombramiento discrecional a los de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia. Ambas modificaciones hacen necesaria una reforma del Título X del Reglamento de la Carrera Judicial. En particular, resulta inaplazable determinar en dicho Reglamento la valoración que hayan de merecer ciertas situaciones -como las de servicios especiales, excedencia voluntaria para el cuidado de los hijos o para atender al cuidado de un familiar, comisiones de servicio, etc.- a los efectos de los requisitos de acceso a determinados destinos y preferencias que por razón del tiempo de servicios prestados en los distintos órdenes jurisdiccionales se establecen en el

¹⁰ Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 51, correspondiente al día 28 de febrero de 2004. Véase el texto de los preceptos modificados en el § 4 de la presente publicación.

Capítulo V del Título I del Libro IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 110.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo el trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley Orgánica, ha adoptado, en su reunión del día 25 de febrero de 2004, el siguiente Acuerdo:

Artículo 1.

Se modifican los artículos 174, 175, 176.3, 177, 178, 179.1, 180.4, 182.4, 184, f), 186, 187.2 y 4, 189, 190.2, 191.1, 192, 194, 195.2, así como 197.2 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que quedan redactados de la siguiente forma:

.....

Artículo 2.

Se añaden al Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, los siguientes preceptos:

Artículo 180 bis:

“1. Salvo la estricta antigüedad escalafonal, en la categoría de que se trate,

Disposición adicional:

1. La referencia a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el apartado 6 del artículo 329 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se entenderá comprensiva de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

2. La continuidad en el destino en el supuesto de adquisición de la condición de especialista prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial regirá igualmente para los Magistrados de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional que adquieran la condición de especialista en sus respectivos órdenes jurisdiccionales.

Disposición transitoria segunda:

A los efectos previstos en el artículo 330.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, la antigüedad en órganos mixtos sólo se computará por mitad a partir de la fecha de entrada en vigor de esta última.

Disposición transitoria tercera:

En tanto no se desarrollen reglamentariamente las pruebas previstas en el artículo 330.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no regirá la preferencia que dicho precepto reconoce para la provisión de plazas en las salas penales de la Audiencia Nacional

Disposición transitoria cuarta:

A los efectos previstos en el artículo 186 del presente Reglamento:

a) El tiempo durante el cual se haya ejercido como Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en situación de servicio activo tendrá la consideración de servicios prestados en el orden jurisdiccional al que pertenezca la Sala de dicho Tribunal a la que haya estado adscrito el Magistrado.

Cuando el Magistrado no haya estado adscrito a una Sala determinada, los servicios prestados en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo se considerarán prestados en el destino de procedencia.

b) Los servicios prestados en situación de servicio activo en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial se considerarán prestados en el destino de procedencia.

Disposición transitoria quinta:

Los Jueces Decanos exentos de tareas jurisdiccionales que no puedan ejercer la opción prevista en el artículo 82.2 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, podrán elegir, al cesar en su cargo, la jurisdicción de la Audiencia Provincial a la que queden adscritos en la que deban considerarse los servicios prestados durante el tiempo en que han desempeñado el cargo de Juez Decano, salvo que la plaza a la que se concurre pertenezca a las reservadas a Magistrado especialista.

Disposición derogatoria:

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo.

Disposición final:

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado.

§ 11

ACUERDO del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 2 de abril de 2008, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.¹¹

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 19 de julio de 2007, adoptó el acuerdo de «promover en el ámbito de los procesos selectivos para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, la adopción de medidas similares a las que el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, prevé para la provisión de puestos en la Administración General del Estado».

El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y, en su artículo 9, que lleva por título «Adjudicación de puestos de trabajo» dispone que: «Una vez superado el proceso selectivo, las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios o categorías de personal laboral de la Administración General del Estado y hayan sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad, podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección de plazas dentro del ámbito territorial que se determine en la convocatoria, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificado, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada».

Las previsiones del Real Decreto son de aplicación -según señala su artículo 1.2-a los procedimientos de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo del personal al que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en donde no se incluye a los miembros de la Carrera Judicial, por lo que la citada previsión no resulta de directa aplicación a los mismos, siendo necesaria pues una previsión específica para la extensión de sus efectos a los miembros de la Carrera Judicial, razón por la cual se plantea la modificación del Reglamento de la Carrera Judicial.

La modificación que se aborda viene a hacer efectiva y real la previsión contenida en los artículos 9.2, 10, 14 y, más específicamente, en el artículo 49 de la Constitución Española que dispone que: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga especialmente a todos los ciudadanos».

El mencionado precepto se inserta en el capítulo tercero del Título I de la Constitución, dentro de los llamados «Principios rectores de la política social y económica» y, en cuanto tal, supone la imposición de un deber general a todos los poderes públicos de orientar su actuación en el sentido que resulte más adecuado para hacer posible la integración social de las personas con discapacidad y la igualdad en el disfrute de los derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. La imposición de un deber de esta naturaleza puede dar lugar a la necesidad de adopción de medidas específicas concebidas para prevenir o compensar las desventajas sufridas por este grupo de personas y que justifiquen una diferencia de trato, siempre que dicha diferencia de tratamiento se conciba como único medio para garantizar a este colectivo una efectiva igualdad de oportunidades.

Este principio de la diferencia de trato como medio para evitar la discriminación ha sido asimismo acogido en el ámbito del derecho comunitario. En concreto, la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 vino a establecer un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y en su artículo 4.1 incluye un mandato a los Estados miembros para «... disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en

¹¹ Publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 88 de 11 de abril de 2008.

el artículo 1 (de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual) no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado».

Los anteriores preceptos constitucionales han sido objeto de desarrollo legal a través, fundamentalmente, de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad que es el instrumento legal que establece el vigente marco de la integración social de las personas con discapacidad, define la igualdad de oportunidades como la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, y contempla la adopción por los poderes públicos de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de las personas con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.

En lo que se refiere al acceso a la función pública, el desarrollo de las previsiones constitucionales ha tenido su reflejo en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y, en la Ley 23/1988, de 28 de julio, que modificó la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, incluyendo en ésta una disposición adicional decimonovena, que prevé un cupo de plazas, no inferior al tres por ciento, en las ofertas de empleo público, para personas con discapacidad. La compatibilidad de esta previsión con el artículo 23.2 de la Constitución fue reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 269/1994, de 3 de octubre, que considera que la reserva porcentual de plazas en una oferta de empleo, destinadas a un colectivo con graves problemas de acceso al trabajo, no solo no es en sí misma contraria a la igualdad, sino que la hace posible y efectiva.

Posteriormente, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, dio nueva redacción a la citada disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, introduciendo en la oferta de empleo público de cada año la reserva de un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, de modo que dicho colectivo llegue a alcanzar el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado. El Real Decreto 2271/2004, de 3 diciembre vino a completar las previsiones contenidas en la citada Ley 53/2003, contemplando en su artículo 9 la previsión cuyo ámbito de aplicación a la Carrera Judicial ahora se plantea.

Las anteriores previsiones han tenido igualmente su reflejo específico en la Ley Orgánica del Poder Judicial que, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, dispone en su artículo 301.8, en materia de ingreso y ascenso en la Carrera Judicial, que: «También se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras Judicial y Fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas».

De conformidad con lo expuesto, cabe afirmar que la aplicación de una medida como la prevista en el art. 9 del Real Decreto 2271/04, en el ámbito de los procesos selectivos de ingreso en la Carrera Judicial, cuenta con una fundamentación constitucional y legal suficiente. Dicha medida se inserta, de forma específica, en lo que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial define como la «compensación de desventajas», principio que habilita para la adopción de aquellas medidas, de carácter proporcionado y razonable, que justifiquen un tratamiento diferenciado a las personas con discapacidad, como único medio para la garantía efectiva de la igualdad y no discriminación de este colectivo.

La presente modificación reglamentaria, además de incorporar al Reglamento de Carrera Judicial las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, recoge los principios de carácter general que, sobre el acceso de los discapacitados al empleo público, se contemplan tanto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre como en el citado Real Decreto, con la finalidad de establecer una regulación más completa y sistemática que, en desarrollo de lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorpore los principios generales aplicables a dicho acceso.

La inclusión en el texto de esta materia se lleva a cabo mediante la adición en el Título I («De la selección para el ingreso en la Carrera Judicial») de un nuevo Capítulo II que, con la denominación de «Ingreso en la Carrera Judicial de las personas con discapacidad», comprendería los nuevos artículos 4 a 11. Debe tenerse en cuenta que, en el momento actual, los citados preceptos carecen de contenido por haber sido derogados por Acuerdo Reglamentario 2/2001, de 7 de marzo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 13 de Marzo).

En la elaboración del presente Acuerdo han sido tenidos en cuenta los informes emitidos durante el trámite de audiencia a las asociaciones, órganos y entes mencionados den el artículo 110.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, ha sido consultado el tejido asociativo de la discapacidad, articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que canaliza las demandas de la ciudadanía con discapacidad.

Artículo único. Se añade al Título I del Reglamento de Carrera Judicial un Capítulo II, que lleva por título

«Ingreso en la Carrera Judicial de las personas con discapacidad», y que comprende los artículos que a continuación se señalan.

Artículo 4. 1. Las personas con discapacidad

Artículo 5. 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 301.8

Artículo 6. Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido

Artículo 7. Las personas discapacitadas que se hayan presentado

Artículo 8. Una vez superado el proceso selectivo

Artículo 9. El cambio en el orden de prelación se aplicará

Artículo 10. 1. En las oposiciones y concursos, pruebas de promoción

Artículo 11. Entre los criterios de valoración positiva que se establezcan

Madrid, 2 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago.

§ 12

Acuerdo de 26 de noviembre de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a efectos del cómputo del permiso de tres días contemplado por el art. 373.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.¹²

El artículo 373.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los Jueces y Magistrados «(...) también podrán disfrutar de permisos de tres días, sin que puedan exceder de seis permisos en el año natural, ni de uno al mes».

El precepto legal no exige expresamente que los días de permiso a que se refiere hayan de ser días naturales; sin embargo, el artículo 231 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial dispone que «Los Jueces y Magistrados tienen derecho al disfrute de un permiso anual de vacaciones y de permisos de tres días naturales, en las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el presente Reglamento». La regulación reglamentaria viene pues a efectuar una interpretación restrictiva de lo señalado en la Ley Orgánica, en concreto, la que considera que los días de permiso han de ser días «naturales», excluyendo la opción de que se computen como tales los días hábiles.

Sobre la interpretación efectuada por el mencionado precepto reglamentario tuvo ocasión de pronunciarse el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en Acuerdo de 16 de enero de 2008, dictado en la resolución del recurso de alzada n.º 186/07, en el que literalmente señala que:

«(...) cuando el legislador ha querido que los días de un permiso sean hábiles lo ha hecho constar así expresamente en la norma, conclusión que se ve averada por la apreciación de la dicotomía (o contraposición) entre días hábiles y días naturales en dos apartados de un mismo precepto (los números 5 y 6 del art. 373 de la LOPJ), introducidos, de modo simultáneo por idéntica Ley Orgánica (la 3/2007).

Desde esta perspectiva, debemos necesariamente colegir que los «días» a que alude el número 4 del artículo 373 de la LOPJ tienen un alcance similar a los «días» a que se refiere el número 6 y, en consecuencia, al no estar ese término adjetivado (a diferencia de lo que acontece en el número 5, en el que, insistimos, se consigna la expresión «días hábiles») se trata de días naturales».

Ahora bien, junto a esta interpretación, de carácter eminentemente formalista, es posible otra distinta que, tomando en consideración el criterio general de que las normas favorables no deben ser objeto de una interpretación restrictiva, tenga asimismo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil, en donde se establece que las normas también han de interpretarse en relación con «...la realidad social de tiempo en el que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas».

En este sentido, la finalidad última de las normas que regulan los permisos y licencias no es otra que favorecer el descanso y coadyuvar a lo que hoy se conoce como conciliación de la vida personal y laboral, siendo éste un principio expresamente acogido en el apartado 7 del artículo 373 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo: «Los jueces y magistrados tendrán derecho a permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará a las particularidades de la carrera judicial la norma de la Administración General del Estado vigente en la materia.

En concreto, los permisos de 3 días contemplados en el art. 373.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

¹² Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 8 de diciembre de 2008.

tienen una finalidad equivalente al llamado «permiso por asuntos particulares» previsto en el artículo 48.1.k de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Y, al igual que estos permisos, su objeto es la gestión de aquellos asuntos que precisan ser atendidos en horario y jornada laboral o que exigen un desplazamiento, y los días reconocidos tienen la consideración de hábiles. La realización efectiva del principio de conciliación y la adaptación a la normativa vigente en la Administración General del Estado, abogan a favor de la presente modificación del Reglamento de Carrera. La modificación se concreta a dos aspectos puntuales: en el artículo 231 se suprime la expresión «naturales» y se adapta a ello la redacción del apartado primero del artículo 236.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 110.2. g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo informe de la Comisión de Igualdad y con cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley Orgánica, ha adoptado, en su reunión del día 26 de noviembre de 2008, el siguiente Acuerdo:

Artículo único.

Se modifican los artículos 231 y 236, apartado 1 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en los términos que a continuación se señalan:

Artículo 231. Los Jueces y Magistrados tienen derecho al disfrute

Artículo 236.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 373.4 de la Ley Orgánica

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.

§ 13

Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias a los efectos de su equiparación legal con los funcionarios públicos.¹³

I

Una de las competencias fundamentales atribuidas al Consejo General del Poder Judicial es la potestad reglamentaria de desarrollo de la LOPJ en relación con «las condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto judicial», sin innovar ni alterar aquél en su conjunto, pero regulando «en los casos en que sean necesarios para la ejecución o aplicación de esta ley, en aquellos en que así se prevea en ésta u otra ley y, especialmente» (art. 110.2 LOPJ), entre otras materias, en lo que se refiere al régimen de licencias y permisos de Jueces y Magistrados [art. 110.2.g) LOPJ].

II

En los últimos años se han aprobado en nuestro país una serie de leyes que han tenido como principal objeto el estatuto del funcionario público. Este proceso, que ya se inició con las modificaciones de la legislación de función pública de 1984, ha culminado con la aprobación de una nueva regulación en la materia, concretamente, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que ha redefinido el estatuto del servidor público, y que ha dispuesto un nuevo régimen de licencias y permisos en coherencia con las disposiciones que al respecto recoge la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, singularmente en lo que se refiere a los permisos y licencias relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género.

En este contexto, precisamente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificó, mediante su disposición adicional tercera, apartado catorce, entre otros preceptos, el art. 373 LOPJ, para añadir un nuevo apartado 7 del siguiente tenor:

«7. Los Jueces y Magistrados tendrán derecho a permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará a las particularidades de la carrera judicial la normativa de la Administración General del Estado vigente en la materia.»

La ausencia de un desarrollo reglamentario y de la necesaria adaptación de los últimos derechos reconocidos en la legislación general de función pública al ámbito de la carrera judicial, se ha suplido, hasta el momento, por la actuación de la Comisión Permanente del Consejo, que ha venido concediendo licencias y permisos previstos en la legislación general de función pública y no recogidos en el Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, en aras a promover la homologación de jueces y magistrados con el resto de funcionarios públicos en esta cuestión, tal como recoge expresamente la exposición de motivos de la LOPJ.

Por demás, la materia no sólo no está reservada a Ley Orgánica, sino que, como se ha dicho, ha sido atribuida doblemente por el legislador al propio Consejo General del Poder Judicial, de un lado, con carácter general, al incluirla entre las materias susceptibles de integrar la potestad reglamentaria [art. 110.2.g)

¹³ Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 5 de enero de 2009.

LOPJ], y de otro, de forma más explícita, al disponer, en el art. 377 LOPJ, que «[r]eglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración, y cuanto no se halle establecido en la presente Ley».

III

Con estos antecedentes, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 2 de abril de 2008, acordó encomendar a la Comisión de Estudios e Informes el inicio de los trámites pertinentes para la modificación del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias, a los efectos de su equiparación legal con los de los funcionarios públicos, sobre la base del acuerdo presentado al Pleno por la Comisión de Igualdad.

La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 12 de marzo de 2008, acordó «por unanimidad elevar al Pleno, para, en su caso, remisión a la Comisión de Estudios, la propuesta de modificación del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias, a los efectos de su equiparación legal con los de los funcionarios públicos».

A la vista y consideración de todo lo anterior, se presenta la siguiente propuesta de modificación cuyos elementos más significativos son los siguientes:

Modificación de permisos y licencias ya previstos en el Reglamento de la Carrera Judicial, ampliándolos a fin de adaptar aquellos a los equivalentes contenidos en la normativa general de funcionarios públicos; así, las reformas del art. 241 del Reglamento de Carrera Judicial que, en relación con el art. 49.a) de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, incluirá un incremento de dos semanas de licencia por parto en el supuesto de nacimiento de hijo discapacitado y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple, o del art. 243 del Reglamento de Carrera Judicial que, en relación con el art. 49.b) de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, extenderá hasta dos meses de duración la licencia en caso de desplazamiento previo de los adoptantes con motivo de la adopción internacional.

Incorporación al Reglamento de Carrera Judicial de permisos, licencias y reducciones de jornada no previstos expresamente hasta el momento. Con este objetivo y a fin de dar cumplimiento al art. 373.7 LOPJ, se recogen y adaptan los permisos que la Ley 7/2007, reconoce a los funcionarios públicos en los arts. 48 y 49, singularmente los relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género, siempre que resulten compatibles con las «particularidades» (art. 373.7 LOPJ), de la función jurisdiccional. De esta forma se procede a la regulación de los permisos y licencias por lactancia; por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa precisen permanecer hospitalizados a continuación del parto; para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; por guarda legal, por ostentar el cuidado directo de persona mayor que requiera especial dedicación, o de persona discapacitada que no desempeñe actividad retribuida; por cuidado directo de familiares primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, en iguales condiciones de necesidad de dedicación especial y sin recursos propios, por fallecimiento, accidente o enfermedad grave dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral, por traslado del domicilio sin cambio de residencia, y por razón de violencia de género.

Por lo que se refiere a los nuevos permisos y licencias, se ha de destacar la complejidad que acompaña su adaptación al ámbito de la carrera judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional. Con carácter general, y de principio, la legislación aplicable a funcionarios traduce estos permisos en reducciones de jornada, que pueden a su vez conllevar la eventual reducción correspondiente de las retribuciones. La dificultad radica en trasladar estas posibilidades de reducción de jornada al ámbito de la potestad jurisdiccional, al ejercicio del deber y de la función de Administrar Justicia; dicho de otro modo, no a la realización o prestación de cualquier tipo de servicio o actividad pública, sino a la función pública y al mismo tiempo potestad pública, que traduce el ejercicio y la actuación de un poder del Estado como titular del mismo, a la sazón, el Poder Judicial, poder que es, por imperativo constitucional, un poder independiente, residenciado en todos y cada uno de sus miembros (art. 117 CE).

Sin embargo, no parece justificable, necesario, ni proporcionado que el respeto a los derechos de los ciudadanos, y el ejercicio de la potestad jurisdiccional sitúen a jueces y magistrados en condiciones sustancialmente inferiores a los derechos y deberes reconocidos al resto de los funcionarios públicos. En esta línea de principio, y pese a las dificultades señaladas, la reforma pretende compatibilizar el reconocimiento de estos permisos, licencias y reducciones de jornada con el cabal ejercicio de la función y,

por tanto, con la prestación del servicio público de la justicia, sin que su disfrute pueda significar en modo alguno merma de los derechos de los ciudadanos que acuden a la jurisdicción; lo contrario significaría el desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24 CE.

Por tanto, la flexibilidad horaria no puede afectar a los horarios mínimos de audiencia pública, ni a la celebración de vistas y juicios en punto a su determinación en fechas posteriores a las que debieran corresponder según el tipo y naturaleza del procedimiento. Lo que no puede suponer una demora o mayor duración de la tramitación de los procesos, ni derivar en la desatención de los asuntos judiciales pendientes. Lo anterior exige tanto la introducción de fórmulas de planificación, como la adopción de las medidas de sustitución y planes de refuerzo necesarios para el cumplimiento de la función y la efectividad del régimen de permisos y licencias previsto; esfuerzo en el que han de implicarse tanto los órganos de gobierno con capacidad para la toma de decisiones, como los propios miembros de la carrera judicial al ejercer su legítimo derecho.

En este esfuerzo de compatibilización de ambos intereses (generales en punto a la prestación del servicio y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, e individuales, de jueces y magistrados), en aras a encontrar fórmulas que permitan su conjugación, facilitando la determinación del horario de audiencia pública, siempre que se cumpla con el mínimo establecido, o articulando nuevas formas y técnicas de flexibilización y ordenación del trabajo, ocupan un lugar destacado los órganos competentes para determinar las condiciones y modos en que se ejerzan los permisos, licencias y reducciones de jornada que pudieran concederse, pero también cumple a este Consejo General del Poder judicial la competencia para adoptar criterios generales con relación a la eventual introducción de técnicas de flexibilización y ordenación del trabajo, así como la posibilidad de aprobar planes de sustitución que permitan hacer realidad el disfrute de los permisos, licencias y reducciones de jornada, estableciendo el modo en que éstos habrán de ponderarse a efectos retributivos y de evaluación de rendimiento.

Por lo que se refiere a la nueva regulación del régimen de permisos, licencias y reducciones de jornada, se introducen modificaciones de otra naturaleza dirigidas, de una parte, a compatibilizar su disfrute con la participación en los cursos de formación que se convoquen por el Consejo, siempre que la asistencia y participación en dichos cursos sea compatible con la naturaleza, objetivo y duración de permisos, licencias y reducciones de jornada, y de otra, a extender la competencia de los actuales órganos con competencia para otorgar los permisos y licencias (esto es, la Presidencia de los órganos mencionados en el art. 238 del Reglamento de Carrera Judicial, a saber, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) a la concesión, o denegación, de los nuevos permisos, licencias y reducciones de jornada introducidos por la reforma que se propone.

Sistemáticamente, dada la extensión del Reglamento de Carrera judicial, y con la intención de evitar que la introducción de nuevos artículos obligase a una re enumeración importante del conjunto de los preceptos reglamentarios, se ha optado porque las disposiciones de nueva incorporación sigan la actual numeración del precepto, con la identificación como bis, o ter, si procede.

Finalmente, en coherencia con el nuevo régimen de permisos, licencias y reducciones de jornada que se propone, se modifica el título del capítulo IV, que pasará a denominarse «Licencias, permisos y reducciones de jornada para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género», en clara vocación de norma de desarrollo de lo previsto en el art. 373.7 LOPJ.

IV

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 110.2 g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo informe de la Comisión de Igualdad y con cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley Orgánica, ha adoptado, en su reunión del día 23 de diciembre de 2008, el siguiente acuerdo:

Artículo único.

Se modifica el capítulo IV del título XII del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en los términos que a continuación se señalan:

La rúbrica del capítulo IV del título XII pasará a ser la siguiente:

Licencias, permisos y reducciones de jornada para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género.

Artículo 241. 1. Las Juezas y Magistradas tendrán derecho
 2. La interesada distribuirá libremente el período de permiso
 3. En el supuesto en que, llegado el momento previsto

Artículo 241 bis. 1. Los miembros de la carrera judicial tendrán derecho
 2. El permiso empezará a contar a elección del interesado,
 3. En los casos de adopción o acogimiento internacional
 4. En el supuesto contemplado en el párrafo anterior,
 Artículo 242. 1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 373.6
 2. Este permiso es independiente del disfrute compartido

Artículo 242 bis.1. El tiempo transcurrido durante el disfrute
 2. Los miembros de la carrera judicial que hayan disfrutado

Artículo 243. De conformidad con lo dispuesto en el art. 373.7
 a) Por lactancia de un hijo menor de doce meses las Juezas y
 b) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra
 d) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de
 e) Por razones de guarda legal, cuando tengan el cuidado
 f) Por cuidado de un familiar de primer grado, tendrán
 g) Por cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado
 h) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
 i) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia,

Artículo 243 bis.1. Las ausencias de las Juezas y Magistradas
 2. Las Juezas y Magistradas víctimas de la violencia de género,
 3. La concesión de la licencia por reducción de jornada por razón.....

Artículo 243 ter. 1. La competencia para otorgar los permisos,
 2. En todo caso, se garantizarán las medidas de sustitución
 3. El disfrute de los permisos, licencias y reducciones de jornada
 4. La concesión de los permisos, licencias y reducciones

Disposición transitoria.

Las licencias y permisos en tramitación a la entrada en vigor de este Acuerdo se regirán por lo dispuesto en el mismo.

Disposición final.

Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
 Madrid, 23 de diciembre de 2008.—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Divar Blanco.

§ 14

Acuerdo de 19 de noviembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo que se refiere a la inclusión de prórroga anual de los nombramientos de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.¹⁴

El título V bis del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, de conformidad con las directrices fijadas por los artículos 200 a 202 y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece el régimen jurídico aplicable a los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, cuyo ámbito de actuación en los Tribunales y Juzgados se configura en atención a la concurrencia de circunstancias excepcionales e imprevistas que desaconsejan la puesta en funcionamiento del régimen ordinario de sustitución.

Dentro del referido título, los artículos 130 a 136 regulan la tramitación que se ha de llevar a cabo hasta el nombramiento de los interesados para el año judicial siguiente. La finalidad primordial del procedimiento de selección es la salvaguardia de los principios de preferencia, mérito e idoneidad que han de ser tenidos en cuenta, tanto por las Salas de Gobierno al elaborar las propuestas de nombramiento, como por el propio Consejo General del Poder Judicial a la hora de efectuar las designaciones que procedan. Dichos principios entroncan con los de igualdad, mérito y capacidad a que se refiere el artículo 103.3 de la Constitución para el acceso a la función pública.

Las previsiones que en tal sentido desarrolla el Reglamento 1/1995, dan lugar a la realización de un procedimiento para la graduación de la idoneidad y méritos de los candidatos, que es por definición largo y complejo, y la reiteración íntegra del mismo con carácter anual puede incidir negativamente sobre el principio de eficacia que el artículo 103.1 de la Constitución establece como una de las pautas de actuación de la Administración.

Por ello, con la finalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de la actividad administrativa desempeñada para el nombramiento de los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, se estima que la posibilidad de prorrogar los nombramientos efectuados más allá del año judicial siguiente al de la convocatoria, contribuirá sin duda a reforzar la efectividad del principio de eficacia antes aludido, sin que ello redunde en detrimento de los principios de mérito e idoneidad que la Ley Orgánica del Poder Judicial proclama.

La facultad de prórroga que se instaura, que no supone solución de continuidad respecto del originario nombramiento, no resulta extraña a nuestro ordenamiento jurídico. El artículo seis del Real Decreto 326/2002, de cinco de abril, sobre régimen de nombramientos de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal, expresamente prevé que el nombramiento de los Abogados fiscales sustitutos para el siguiente año judicial podrá ser prorrogado. La finalidad que se persigue mediante la prolongación del nombramiento de los Fiscales sustitutos es extensible al ámbito judicial, y por ello, resulta conveniente abordar la reforma del artículo 134.1 del Reglamento 1/1995 al objeto de introducir con carácter potestativo la facultad de prórroga de los nombramientos que se efectúen, previo informe de idoneidad de la Salas de Gobierno.

Asimismo, en aras a lograr una mayor agilidad en el proceso de selección, se estima necesario evitar que el acopio de documentación aportada por los candidatos nombrados Magistrados suplentes o Jueces sustitutos en anteriores convocatorias, deba reiterarse en cada una de las convocatorias siguientes a las que concurran, ya que tanto las Salas de Gobierno como este Consejo son ya conocedores de los méritos acreditados. Por ello, la necesidad de aportar la documentación a que se refiere el artículo 131.2. 4.ª 2. del Reglamento 1/1995 se ha de circunscribir exclusivamente a aquella que sea acreditativa de los nuevos méritos contraídos por los candidatos.

¹⁴ Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 286 de 27 de noviembre de 2009.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 19 de noviembre de 2009, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, previo informe de la Comisión de Igualdad y de las asociaciones profesionales, y audiencia de las Salas de Gobierno de Tribunales, aprobar el presente Acuerdo:

Artículo único.

Se modifica el título V bis del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en los términos que a continuación se señalan:

Uno. El artículo 131.2.4.^a 2 pasará a tener la siguiente redacción:

«A la solicitud se acompañarán fotocopias del documento nacional de identidad,

Dos. El artículo 134.1 pasará a tener la siguiente redacción:

«El Consejo General del Poder Judicial, con anterioridad al 30 de junio de cada año,

Disposición transitoria.

La facultad de prórroga que se establece en el artículo 134.1 será de aplicación a los nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial para el periodo 2009/2010.

Madrid, 19 de noviembre de 2009.—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.

§ 15

ACUERDO DEL Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 25 de febrero de 2010, por el que se aprueba el reglamento 1/2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.¹⁵

Mediante este Reglamento, queda derogado el Capítulo III del Título X, artículos 189 a 197 del reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

¹⁵ Publicado en el BOE número 56 de 5 de marzo de 2010.